

Ana Original  
14 AGO 2018 12D- 63300000  
EDUCACION  
Jan 4  
22/8/2018  
4:18 PM**Asunto:** ACCIÓN DE TUTELA, RADICADO: 2018-00277**De:** Juzgado 12 Familia - Seccional Cali <j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>**Fecha:** 14/08/2018 04:23 p.m.**Para:** Luis Alberto Bustos Perdomo <notificacionesjudiciales@c

Buenas tardes,

Por medio del presente remito oficio No. 1304, a través del cual le interlocutorio No. 1696 del proceso de la referencia.

Anexo: oficio, copia de la acción de tutela y anexos.

ALCALDE DE  
SANTIAGO DE CALI

No. 2018-4121010-006926-2

**Asunto:** ACCION DE TUTELA 2018-000277 ADRIANA PAOLA GIRALDO**Fecha Radicado:** 14/08/2018 04:49:14

Usuario Radicador: NATALIA SUAREZ  
Destino: Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Judicial  
Remitente: (CJ) JUZGADO DOCE DE FAMILIA  
Visite Nuestra Página - <http://www.cali.gov.co>  
Santiago de Cali (Valle del Cauca) Carr. Torre Alcaidía, Línea 195



201841210100069262

**Juzgado Doce de Familia del Circuito de Cali**  
**PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO ELÍAS SERRANO"**  
**PISO 8 - TEL. 8986868 EXT. 2123**

Adjuntos:

OFICIO 1304 2018-00277.pdf

65,5 KB

TUTELA 2018-00277.pdf

955 KB

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL**



**JUZGADO DOCE DE FAMILIA DE CALI**  
**Trece de agosto de dos mil dieciocho**

**OFICIO N° 1304**

**Doctor**  
**NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CALI**  
**Avenida 2 Norte No. 10- 70**  
**EDIFICIO CAM**  
**La ciudad**

<b>CLASE DE PROCESO:</b>	TUTELA
<b>RADICADO:</b>	760013110012 2018-0027700 (FAVOR RELACIONAR ESTE NÚMERO AL CONTESTAR)
<b>TUTELANTE:</b>	ADRIANA PAOLA GIRALDO MARTINEZ CC 1.130.585.996
<b>ACCIONADO:</b>	ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI y COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
<b>VINCULADOS:</b>	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL y otros
<b>ASUNTO:</b>	NOTIFICA ADMISION DE TUTELA

Cordial saludo.

Le informo que el día de hoy, 13 de agosto de 2018, este despacho profirió auto admisorio en la tutela de la referencia y resolvió lo siguiente:

"PRIMERO: ADMITIR, tutela presentada por la señora ADRIANA PAOLA GIRALDO MARTINEZ en frente a la ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI, representada legalmente por el DR. NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID y LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL por la presunta violación de los derechos fundamentales al Debido Proceso, al Trabajo, a la igualdad, al Principio de Confianza Legítima Principio de la Prevalencia de la Realidad sobre las formalidades, así como el de petición. SEGUNDO: NOTIFICAR por el medio más expedito al ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI, DR. NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID y/o quien haga sus veces, y a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL representada legalmente por el señor JOSE ARIEL SEPULVEDA MARTINEZ y/o quien haga sus veces la admisión de esta acción, con entrega de copia de la misma, para que en el término de DOS (2) días, siguientes al de su notificación, ejerza el derecho de defensa que le asisten. TERCERO: VINCULAR a La Secretaria de Educación Municipal de la Alcaldía, Subsecretaria de Calidad Educativa de la Alcaldía, Gobernación del Valle, Ministerio de Educación Nacional, Unión Temporal FCC Racionalizar Procurador General de la Nación, Departamento Administrativo de la Función Pública y Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (DADII) Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano del Centro Administrativo Cam, y a los interesados en participar en la Convocatoria 437 de la CNSC, para que



en igual termino DOS (2) días ejerzan su derecho de contradicción. CUARTO: DISPONER por parte de las entidades accionadas la publicación de la presente acción tutelar en su página web para que terceros interesados ejerzan su derecho de contradicción o defensa de acuerdo a sus intereses. QUINTO: NEGAR la medida provisional solicitada por la accionante, acorde a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. SEXTO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas: Tener en su valor probatorio los documentos aportados con la acción y las demás que surjan durante su trámite. SEPTIMO: Reconocer personería al Dr. EDUARDO ARANGO SUAREZ, para que actúe como apoderado judicial de la parte actora en los términos y para los efectos del memorial poder conferido y para los fines indicados en el mismo. NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. ANDREA ROLDÁN NOREÑA. Juez".

Se acompaña copia de la acción de tutela y anexos para los fines pertinentes.

Cordialmente

MARITZA RICO SANDOVAL  
SECRETARIA





O-EXAMINACIÓN  
EXCEPCION

Ana Original  
06 AGO 2018  
2 FI

Fwd: NOTIFICACION AUTO DECRETA NULIDAD EN TUTELA ADRIANA PAOLA GIRALDO MARTINEZ VS CNSC Y OTROS. RAD 012 2018.00277 01

Destacados  
Enviados  
Recibidos  
NOTIFICACIONES  
DIRPED  
Notas

notificaciones judiciales

10:22

Forwarded message

From: Secretaria Sala Familia Tribunal - Seccional Cali <salafamilia@condojudicialcal.gov.co>  
Date: Jan., 6 ago. 2018, 3:38 p. m.  
Subject: NOTIFICACION AUTO DECRETA NULIDAD EN TUTELA ADRIANA PAOLA GIRALDO MARTINEZ VS CNSC Y OTROS. RAD: 76 001 31 10 012 2018 00277 01  
To: Luis Alberto Bustos Pardo <notificacionesjudiciales@condojudicialcal.gov.co>, Franz Rojas <notificacionesjudiciales@condojudicialcal.gov.co>, Mariana Giraldo <notificacionesjudiciales@condojudicialcal.gov.co>, Valdeolivera <notificacionesjudiciales@condojudicialcal.gov.co>, Juan Carlos Rodriguez Poveda <procesosjudiciales@procuraduria.gov.co>, del Socorro Rodriguez <notificacionesjudiciales@condojudicialcal.gov.co>, yza @condojudicialcal.gov.co <notificacionesjudiciales@condojudicialcal.gov.co>, del Socorro Rodriguez <notificacionesjudiciales@condojudicialcal.gov.co>  
Cc: Juzgado 12 Familia - Seccional Cali <12familia@condojudicialcal.gov.co>

Cordialmente,

Miller Alfonso  
15/8/2018  
10:10

Secretaría Sala de Familia  
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali  
Calle 17 No. 4 - 33 Oficina 111



No. 2018-4121010-006659-2  
Asunto: ACCION DE TUTELA 2018-00277 ADRIANA PAOLA GIRALDO M  
Fecha Radicado 06/08/2018 05:19:43

675  
11

Usuario Radicador MILLER BARREIRO HOY Folios:  
Destino Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijudicial  
Remite (CUI) TRIBUNAL SUPERIOR DEL D. D. TUTELA  
Visite Nuestra Pagina - http://www.cali.gov.co  
Santiago de Cali (Valle del Cauca) Cam Torre Alcaldia, Linea 195



201841210100066592

Ta e  
15/8/2018  
10:10

Handwritten mark at the top center of the page.

Small handwritten mark or characters in the top right corner.

Vertical line of dots or marks on the left side.

Vertical line of dots or marks on the left side.

Vertical line of dots or marks on the left side.

Vertical line of dots or marks on the left side.

Small handwritten mark or characters on the right side.

Small handwritten mark or characters on the right side.

Vertical line of dots or marks on the left side.

3

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI  
SALA DE FAMILIA

Santiago de Cali, seis (6) de Agosto de dos mil dieciocho (2018)

Proceso	ACCION DE TUTELA
Accionante:	ADRIANA PAOLA GIRALDO MARTINEZ
Accionado	ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI y COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Radicado	76-001-31-10-012-2018-00277-01
Decisión	DECLARA NULIDAD

Magistrado Ponente: **FRANKLIN TORRES CABRERA.**

Encontrándose el presente asunto para decidir la impugnación planteada contra la sentencia de tutela de primera instancia No. 171 del diecisiete (17) de Julio de 2018 proferida por el Juzgado Doce de Familia de Oralidad de Cali-Valle; dentro de la acción de tutela promovida por la señora ADRIANA PAOLA GIRALDO MARTINEZ, en contra de la ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI y COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, de no ser porque se advierte que se ha incurrido en un vicio con alcance de nulidad, el cual está llamado a declararse.

## I. ANTECEDENTES

### 1.1. SINTESIS DE LOS HECHOS

- La accionante es profesional en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, Especialista en Administración Pública y actualmente se encuentra en trabajo de tesis para optar al título de Magister en Intervención Social con énfasis en conflicto y convivencia escolar.
- Indica que fue vinculada desde el 29 de Junio de 2011 en provisionalidad en el cargo de Profesional Universitario, Código 209, Grado 01 de la Subsecretaría de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Cali, de conformidad con el Decreto 411.0.20.0230 de 2011
- Mediante el Decreto 4112.010.020.0271 del 1 de Junio de 2018, se modificó el manual de funciones y específicamente el perfil profesional para el cargo que actualmente desempeña la accionante. Como consecuencia de ello, tampoco se incluyó en la Convocatoria No 437 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo que imposibilita a la actora participar en el concurso de méritos para el cargo que viene desempeñando.



- ADRIANA PAOLA GIRALDO MARTINEZ, presentó derechos de petición ante la entidad accionada y a la fecha de presentación de la acción de tutela no le han sido resueltos<sup>2</sup>.
- Considera vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, petición, entre otros, la señora ADRIANA PAOLA GIRALDO MARTINEZ, por lo que a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela la cual correspondió por reparto al Juzgado Doce de Familia de Oralidad de Cali - Valle, instancia judicial que profirió sentencia N° 171 del 17 de Julio de 2018<sup>3</sup>, declarando improcedente el amparo constitucional.

## II. CONSIDERACIONES

La acción de tutela se caracteriza por ser un trámite judicial sumario y expedito, con cuyo concurso se pretende establecer una herramienta efectiva y eficaz de protección de los derechos de rango fundamental, los que por su misma naturaleza e íntima vinculación con la consideración de la persona, detentan una especial categoría, por la que es relevante e inaplazable concebir una vía idónea para su resguardo.

Empero, de suyo, como procedimiento judicial, la acción de tutela, al margen de sus características ya anotadas, no está exenta del cumplimiento de formalismos mínimos, con los que luego de su agotamiento, doten de legitimidad y racionalidad a la determinación finalmente adoptada. Es decir, el sendero procesal y las garantías de participación efectiva, entre otras, son las que permiten sostener que la providencia definitiva, emitida en un término tan corto, no obstante, respetó los derechos de quienes están llamados a actuar en su curso. Lo contrario significaría tanto como anteponer el afán de un resultado, al iter que el mismo ordenamiento ha previsto para su construcción. La sustancia, entonces, sin la forma, en los estrados judiciales, deviene sin más en una insondable premisa, cuyo poderío y autoridad corren desbocados, a falta de la ruta para su encauzamiento.

Al respecto tiene dicho la jurisprudencia de tutela de la Sala de Casación Civil, que:

*"El artículo 29 de la Carta Política establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con observancia de las formas propias de cada juicio, entre las que se destaca el derecho del interesado a aducir pruebas y a controvertir las allegadas, sin que este recurso excepcional escape a tales reglas; más cuando los artículos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5 del 306 de 1992 respectivamente, consagran la obligación de notificar en debida forma a las partes e intervinientes de los proveídos que dentro de dichos trámites se dicten"*<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Folio 25 CD

<sup>3</sup> Folios 124 a 131

<sup>4</sup> Auto de tutela del 29 de mayo de mayo de 2012, expedido dentro de la casación: 1908132100002013-00407-01. Magistrado Sustancador: Dr. Fernando Guevara Gómez.

La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que aunque el trámite de la acción de tutela es breve, sumario e informal<sup>5</sup>, esto no debe ser entendido de manera absoluta, en tanto el juez, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el cumplimiento de las garantías procesales, entre las que se encuentra el debido proceso. Por ello, el juez no puede adelantar la acción sin el conocimiento de la autoridad pública o del particular contra quien se dirige, ni de los terceros que eventualmente puedan resultar afectados con la decisión que se tome.<sup>6</sup> Es así que en la jurisprudencia constitucional se ha dejado establecido que la indebida composición del extremo pasivo en el proceso de tutela conlleva la nulidad de la actuación, precisamente, por no haberse practicado en legal forma la notificación de la demanda a una de las partes con interés legítimo en el proceso.<sup>7</sup>

De los elementos probatorios que obran en el expediente, se observa que a los eventuales interesados en participar Convocatoria No. 437 de 2017 de la CNSC, no se les dio la posibilidad de conocer acerca de la presente tutela en aras de que si es de su interés se pronuncien, por lo que debió noticiárselos de la misma a través de la página web tanto de la Alcaldía como de la CNSC. 20/11

Téngase en cuenta que a través de la acción tutelar se busca la orden nulitar o suspender el acto administrativo a través del cual se realizó la modificación del manual de funciones anterior, dejando vigente nuevamente éste y de contera modificar los requisitos para la convocatoria N° 437, por lo que ese tipo de decisiones acarrea conflicto con otros aspirantes, que aunque a la fecha son indeterminados, pueden resultar favorecidos o perjudicados con la decisión de la solicitud de amparo.

En síntesis, la intervención de los interesados en la citada convocatoria, dada la situación fáctica que rodea el asunto que nos concita, resulta imperiosa en aras de procurar las mayores garantías de sus derechos, por lo que se hace necesario vincularlos y que dicho yerro, tal como lo dispone en el numeral 8° del artículo 133 del C.G.P., ha sido erigido como causal de nulidad, preceptiva que resulta aplicable a la acción de tutela en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto 306 de 1992.

Recuérdese que la acción de amparo no es ajena a las reglas del debido proceso, dentro de las cuales se contempla la obligación de notificar a las partes o intervinientes las providencias que se dicten, por así ordenarlo los artículos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5° del Decreto 306 de 1992, mandato que cobrá mayor relieve cuando se trata de informar sobre la iniciación del trámite, y que involucra a los interesados en participar en la convocatoria, pues nace en ese acto la oportunidad para el ejercicio del derecho de contradicción o defensa.

<sup>5</sup> Artículo 14 del Decreto 2591 de 1991.

<sup>6</sup> Acos 260 de 2005; 073 de 2006; 165, 259A, 305 y 349 de 2006; 288 de 2009; 281A de 2010; 160 de 2011 y 024 de 2012, entre muchas otras, en las que la Corte Constitucional declaró la nulidad de toda la actuación dentro de las acciones de tutela, por cuanto no se había conformado debidamente el contradictorio.

<sup>7</sup> Acos 007 de 2003 y 047 de 2005, entre otros.

Como corolario se avizora por esta Magistratura que el trámite judicial así adelantado está sumido en una causal de nulidad, la que de contera se decretará, en aras de que se rehaga la actuación con la debida notificación a través de las páginas web de Alcaldía y CNSC, enterándolos de la iniciación de la tutela y de las pretensiones de ésta.

Además se le pone de presente a la jueza de instancia, que en la también en el petitum de la tutela, se incluye un punto atinente a unos derechos de petición y revisado el contenido de la sentencia, no se avista que se haya ocupado de aquello, por lo que aprovechando que se debe rehacer lo actuado, bien puede centrar su atención en ese aspecto en lo que sea pertinente.

### III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Ponente de la SALA CUARTA DE FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI,

### IV. RESUELVE

**PRIMERO.- DECRETAR** la nulidad de lo actuado en ésta acción de tutela, para que se proceda a vincular los interesados en participar en la Convocatoria No. 437 de 2017 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y se disponga la publicación de la presente acción en la página web de las entidades accionadas, concediéndose el respectivo término para el pronunciamiento y ejercicio del derecho de contradicción o defensa de acuerdo con sus intereses, vencido el cual se proferirá nueva sentencia.

Advertir a la jueza sobre la necesidad de tomar en cuenta lo relativo a los derechos de petición según lo expuesto en la parte final de las consideraciones.

**SEGUNDO.- DEVOLVER** el expediente al Juzgado de origen, a fin que rehaga su actuación, conforme a lo considerado en esta decisión.

**TERCERO.- NOTIFIQUESE** lo resuelto al Juzgado de origen y a los interesados por el medio más expedito y eficaz y librense las demás comunicaciones pertinentes.

CÚMPLASE

  
**FRANKLIN TORRES CABRERA**  
Magistrado

RECIBIDO POR EL SECRETARIO

- 5 437 2017

RECIBO 2 SE. 2017

Señores

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI (Reparto)  
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE (Reparto)  
E. S. D.

Asunto : Acción de Tutela con Medida Cautelar.  
Accionante : Adriana Paola Giraldo Martínez.  
Accionado : Alcaldía de Santiago de Cali  
Comisión Nacional del Servicio Civil.

**EDUARDO ARANGO SUAREZ**, mayor de edad y vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.107.056.751 de Cali (Valle), abogado en ejercicio portador de la Tarjeta Profesional No. 247.583 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación, según poder adjunto, de la señora **ADRIANA PAOLA GIRALDO MARTÍNEZ**, mayor de edad y vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.130.585.996 de Cali (Valle), mediante el presente documento, de la manera más respetuosa, me dirijo a usted señor(a) Juez para presentar Acción de Tutela en contra de la **ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI** y la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL**, con fundamento en el Artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991 y por el Decreto 1382 de 2000, este último en lo relativo a la competencia, todo esto teniendo en cuenta los siguientes aspectos fácticos y jurídicos:

### FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS

1. La señora **ADRIANA PAOLA GIRALDO MARTÍNEZ** (en adelante mi representada) es Profesional en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, Especialista en Administración Pública, y actualmente se encuentra en trabajo de tesis para optar al título de Magister en Intervención Social con énfasis en conflicto y convivencia escolar.
2. Mi representada fue vinculada desde el día 29 de junio de 2011 en provisionalidad en el cargo de Profesional Universitario, Código 209, Grado 01, de la Subsecretaría de Calidad Educativa, perteneciente a la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Cali, con ocasión al Manual de funciones vigente para la época, a saber, **Decreto 411.0.20.0230 de 2011**, mismo en el que se requería de manera precisa la profesión que mi representada ostenta para ocupar el referido cargo.

3. Que el **Decreto 411.0.20.0230 de 2011**, surge como resultado del proceso de Modernización auspiciado por el Ministerio de Educación Nacional, con el propósito de transformar la gestión del sector educativo y alcanzar metas de eficiencia del servicio educativo. Por esta razón el Ministerio de Educación suscribió con el Municipio de Santiago de Cali el Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica No. 362 A, el cual se ejecutó durante el periodo 2001 a 2015. Producto del proceso de modernización desarrollado en la Secretaría de Educación de Cali, el Ministerio de Educación Nacional, mediante actas del 22 y 23 de julio de 2010, autorizó la planta de cargos para el nivel central de la Secretaría de Educación Municipal, financiada con recursos del **Sistema General de Participaciones SGP**. Los empleos creados para la Secretaría de Educación Municipal - nivel central fueron incorporados en el Municipio de Santiago de Cali, mediante los decretos 411.0.20.0500 de agosto 20 de 2010 y modificado con el Decreto 411.0.20.0621 de septiembre 30 de 2010. El Ministerio de Educación Nacional previa aprobación de la planta de cargos para el nivel central de la Secretaría de Educación Municipal, trabajó conjuntamente con el Municipio de Santiago de Cali, los requisitos y competencias requeridas para el desempeño de funciones en los diferentes empleos que financiaría para el cumplimiento a cabalidad de la prestación del servicio educativo en el municipio de Santiago de Cali.
4. Es importante poner de presente que la Alcaldía de Cali ha modificado en reiteradas ocasiones el manual de funciones de la entidad, retirando y agregando, indiscriminadamente y sin sustento jurídico alguno, la profesión que mi representada ostenta del perfil del cargo que esta ocupa. Las primeras modificaciones realizadas fueron las siguientes: **Decreto 411.0.020.997 de diciembre de 201** (que adopta el **Decreto 411.0.20.0062 de febrero de 2007**) y el **Decreto 411.0.20.0746 de noviembre de 2013**, documentos en los cuales se eliminan funciones y perfiles especialmente de los subprocesos misionales de la Secretaría de Educación Municipal, creando una ambigüedad operativa en este organismo.
5. En el año 2014, el Departamento Administrativo de la Función Pública, indicó que las entidades territoriales, debían actualizar sus manuales de funciones, para lo cual el municipio de Santiago de Cali, contrató a la unión temporal FCC Racionalizar, mediante Contrato 4122.0.26.1.332 de 2014, para diagnosticar las cargas laborales, diseñar y perfilar las distintas denominaciones de empleo adscritos a la planta global de la administración central del Municipio de Santiago de Cali, y como resultado de este estudio técnico se genera el manual específico de funciones y competencias laborales, adoptado mediante el **Decreto 411.0.20.1221 de febrero de 2015**. Efectivamente en este documento se evidencia, entre otras cosas, la

necesidad del perfil de Profesional de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos en la Secretaría de Educación, es decir, por primera vez se tuvo un estudio técnico que soportará el establecimiento de perfiles, resaltándose la necesidad del perfil de mi representada para el cargo que la misma ocupa.

6. En el año 2016 el manual de funciones sufre otra modificación sin evidenciarse un estudio técnico que soporte la motivación y pertinencia para generar los cambios realizados en este documento; desde ese instante a mi representada le fueron aplicadas las funciones establecidas mediante **Decreto 411.0.20.0673 de diciembre de 2016** por el cual se adopta el manual específico de funciones y competencias laborales del Municipio de Santiago de Cali, toda vez que en este documento aún se conservaba el perfil de Profesional de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos en el Subproceso de Fortalecimiento de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación Municipal.
7. No obstante lo anterior, a portas de la apertura de la Convocatoria No. 437 de la Comisión Nacional de Servicio Civil, la cual pretende materializar concurso de méritos para la provisión de vacantes en varias entidades del Valle del Cauca, entre ellas la Alcaldía de Cali, la entidad territorial en la que labora mi representada volvió a modificar, nuevamente sin soporte técnico y esta vez en contravía del estudio técnico referido en el hecho anterior, el manual de funciones de la entidad mediante **Decreto 4112.010.020.0271 de Junio 1 de 2018**, retirando nuevamente de los perfiles profesionales de la Secretaría de Educación, de manera más específica para el cargo que actualmente ostenta mi representada, el perfil de Profesional de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos. Lo que generó que en la OPEC de la convocatoria referida no se incluyera la profesión de mi representada para aspirar al cargo que actualmente ostenta. \*
8. En este punto es preciso resaltar que pese a las reiteradas modificaciones del manual de funciones, retirando y agregando entre los perfiles habilitados para el cargo que ostenta mi representada la profesión de la misma, ésta nunca ha sido retirada del servicio, por lo que lleva aproximadamente siete (7) años desempeñando su cargo, pese a que por periodos el manual de funciones vigente haya establecido que su profesión no cumple con el perfil, es más, actualmente sigue ejerciendo su cargo pese a la última modificación del manual de funciones referida en el hecho anterior. \*

9. En este orden de ideas, es importante poner de presente que el Artículo 46 de la Ley 909 de 2004 dispuso que toda reforma de planta de personal de la rama ejecutiva (entendida esta tanto como una reforma integral de la misma denominada reforma administrativo o como una reforma parcial de, por ejemplo, los requisitos de estudio para el ejercicio de un cargo), **deberá motivarse debidamente y basarse en un estudio técnico** que demuestre la necesidad del servicio o de la modernización de la administración, el cual debe elaborarse por las respectivas entidades, o por firmas especializadas en la materia, previo a expedirse los actos administrativos que suprimen o modifican cargos. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección, en Sentencia proferida el 20 de octubre de 2014 bajo la radicación N° 05001-23-31-000-2002-03012-01 (2919-13), sostuvo lo siguiente:

*"Una de las formas más contundentes para demostrar que las razones que motivaron la supresión de cargos no se fundaron en necesidades del servicio o en modernización de la administración, sino en un interés ajeno a estos colectivos, **la constituye el hecho de probar la inexistencia del estudio técnico exigido en la ley o la insuficiencia o limitación del mismo**, o más aún la ausencia de comunicación a la respectiva Comisión Departamental o Distrital del Servicio Civil del inicio del proceso de modificación a sus planta de personal.*

*En este caso, se evidencia que el estudio financiero de la entidad no puede suplir o asimilarse a un estudio técnico, teniendo en cuenta que el proceso de reestructuración obedece a **la necesidad de reformar la Planta de Personal, por lo que era indispensable adelantar un estudio técnico que reflejara su viabilidad, conforme a lo establecido en la Ley 443 de 1998 y el Decreto Reglamentario 1572 del 5 de agosto de 1998. Por tanto, no se contó con un estudio técnico previo que le sirviera de fundamento a la modificación de la planta de personal** y tampoco se comunicó a la Comisión Departamental del Servicio Civil del inicio del proceso de modificación a su planta de personal lo que resulta ser un elemento indicador de la ausencia del procedimiento con sustento legal.*

*Para la Sala, el Decreto 027 de febrero 28 de 2002 enjuiciado, en lo que toca con la demandante, además de estar viciado por estar falsamente motivado al pretender apariencia de legalidad a una situación carente de la misma, **resultó expedido de manera ilegal por ser fruto de una reestructuración que no atendió***

los presupuestos exigidos en el ordenamiento jurídico, porque no se elaboró estudio técnico basado en metodologías de diseño organizacional y ocupacional siguiendo los lineamientos de análisis y evaluación, previstos jurídicamente en el ordenamiento, parámetros desconocidos por el estudio financiero efectuado y presentado como estudio técnico.(...)

(...) De esta manera, se infiere que los estudios técnicos se erigen como un presupuesto que compromete la legalidad de la reestructuración administrativa, pues su inexistencia o incumplimiento de requisitos genera, como consecuencia, la nulidad de los actos que con fundamento en dicho proceso se expidan." (Negrillas y subrayas fuera de texto).

10. Así las cosas, es evidente que la Alcaldía de Cali no se encuentra en la capacidad de acreditar haber cumplido con la carga que le impone la norma en cuanto al estudio técnico previo requerido para la modificación del manual de funciones que suprime el perfil de mi representada del cargo que ocupa, como quiera que existe carencia del mismo, pues como bien se explica en la jurisprudencia en cita, no se trata de un estudio genérico, simplemente financiero o técnico, sino que debe identificar la necesidad de ajustar la planta de personal de la administración central, contener un análisis de la estructura organizacional y capital humano, evaluación de la prestación del servicio, las distintas modificaciones a realizar a la planta de personal, el costo mensual de la misma, la situación de los servidores públicos según su vinculación, los criterios a tener en cuenta para evaluar a cada funcionario, así como los criterios para la definición de la planta de personal y los criterios para la selección de los empleados a desvincular, entre otros; en general, debe tener como objetivo garantizar el mejoramiento y la organización del ente territorial, y determinar que los empleos que se suprimen o reforman se hacen con el fin de mejorar el servicio.

11. Se subraya que la ausencia de este requisito hace que no sea posible identificar que lo que motivó realmente la reforma del perfil académico para ocupar el cargo de mi representada haya sido el deseo de mejoramiento del servicio y no una decisión caprichosa de la administración; falencia que obligatoriamente debe conllevar a declarar la nulidad de dos de los actos administrativos que materializan tales reformas, para el caso que nos ocupa el Decreto 4112.010.020.0271 de Junio 1 de 2018.

solicita  
declarar  
nulidad AA



12. En esta oportunidad, a diferencia de lo acontecido en el pasado la variación injustificada del manual de funciones **se encuentra configurando un perjuicio de características irremediables para mi representada**, como quiera que con ocasión a la actuación caprichosa de la Alcaldía de Cali, mi representada no podrá si quiera inscribirse en la Convocatoria No. 437 de la Comisión Nacional de Servicio Civil para el cargo que lleva ocupando por más de siete (7) años, iniciando la venta de derechos de participación e inscripciones el próximo 16 de julio de 2018. Es decir, la demanda vía ordinaria de los actos administrativos propios de la modificación del manual de funciones que sirvió de base a la Comisión Nacional del Servicio Civil para establecer los requisitos de los cargos, específicamente una acción de nulidad simple, se torna abiertamente ineficaz para la protección de los derechos fundamentales que se quebrantan actualmente a mi representada, pues en pocos de meses cerrará la etapa de inscripciones al concurso de méritos sin que la misma haya podido acceder a inscribirse en el puesto que ha ocupado gran parte de su vida laboral, por una modificación de último momento del manual de funciones que excluye su perfil profesional del ejercicio de su cargo, sin motivación alguna y en contravía del diagnóstico de cargas laborales, diseño y perfilación realizado mediante Contrato 4122.0.26.1.332 de 2014 con la unión temporal FCC Racionalizar.

Conforme a lo anterior, la Jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional ha establecido en reiterados pronunciamientos la procedencia de la acción de tutela contra las actuaciones de la administración pública, cuando, entre otras, los mecanismos ordinarios sean abiertamente ineficaces, tal como acontece en el presente caso, a manera de ejemplo se cita la Sentencia T-957 de 2011, donde se estableció lo siguiente:

*"La jurisprudencia constitucional ha señalado, de manera reiterada y uniforme que, en principio, la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para resolver las controversias que surgen en el desarrollo de las actuaciones administrativas, toda vez que la competencia en estos asuntos ha sido asignada de manera exclusiva, por el ordenamiento jurídico, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, juez natural de este tipo de procedimientos, cuya estructura permite un amplio debate probatorio frente a las circunstancias que podrían implicar una actuación de la administración contraria al mandato de legalidad. Sin embargo, excepcionalmente, es posible tramitar conflictos derivados de actuaciones administrativas por vía de la acción de tutela, bien sea porque se acredite la amenaza de un perjuicio irremediable,*

caso en el cual cabe el amparo transitorio, o porque se establece que los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo son ineficaces para la protección del derecho a la luz de las circunstancias de cada caso en particular, evento en el que opera como mecanismo definitivo."  
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

13. Es importante resaltar que el caso de mi representada no es un hecho aislado, pues las modificaciones del manual de funciones en lo que respecta a la Secretaría de Educación y específicamente a la Subsecretaría de Calidad Educativa, variaron sustancialmente los requisitos de formación, razón por la que muchos de los funcionarios que ingresaron a la Secretaría de Educación en calidad de provisionales, no lograrían ni siquiera tener posibilidades para concursar, aun cuando el perfil (profesión) corresponde al área de desempeño en la cual se encuentran trabajando desde hace varios años.
14. Así las cosas, las actuaciones referidas en los hechos anteriores configuran, con claridad meridiana, la vulneración del **Derecho Fundamental al Debido Proceso**, pues con plena violación de todas las garantías de mi representada se varió sin sustento técnico, injustificadamente y a portas de un concurso de méritos, el perfil profesional del cargo que viene ocupando hace más de siete (7), descalificándola para poder inscribirse y participar para obtener su actual cargo en el referido concurso, actuación de la administración que no se corresponde con los fines esenciales del Estado y genera un perjuicio injustificado a mi representada, más aún si se pone de presente que la modificación del manual de funciones reprochada desconoce el diagnóstico de cargas laborales, diseño y perfilación realizado mediante Contrato 4122.0.26.1.332 de 2014 con la unión temporal FCC Racionalizar, en el cual se justificó técnicamente la necesidad de incluir el perfil de mi representada dentro de las profesiones habilitadas para ocupar el cargo que la misma ostenta, es decir, sin realizar el procedimiento adecuado, alusivo a contratar un estudio técnico justificado para la modificación del manual de funciones, sino por el contrario desconociendo el más reciente estudio técnico realizado, se materializó la modificación del manual de funciones en detrimento de los derechos de mi representada. El derecho fundamental al debido proceso ha sido definido por la Honorable Corte Constitucional, entre otras, en Sentencia T-957 de 2011, en los siguientes términos:

"La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso **"como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la**

protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia". Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda competencia asignada a las autoridades públicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, en procura de la garantía de los derechos de los administrados." (Negrillas y subrayas fuera de texto).

15. Igualmente, con su reprochable actuar la Alcaldía de Cali también vulnera el Derecho Fundamental a la Igualdad de mi representada, toda vez que la variación del manual de funciones en lo que respecta a la eliminación de su profesión del perfil para acceder al cargo que actualmente desempeña, se configura como un trato abiertamente desigual con las demás dependencias de la Alcaldía de Cali, en las que no se retiraron las profesiones de las personas que han venido ocupando los cargos a proveer, lo que en términos prácticos establece que en la subsecretaría a la que pertenece mi representada los actuales empleados no podrán participar por ocupar sus cargos en carrera administrativa, a diferencia de lo que sucederá en otras dependencias. Además de lo anterior, la vulneración del principio de igualdad no solo se configura frente a empleados de otras dependencias de la Alcaldía de Cali, sino que además se predica frente a la ciudadanía en general, que ostentan profesiones diferentes a la profesión concretamente excluida en la modificación de manual de funciones reprochada, a saber, el Profesional de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, a quien, no está de más resaltar, no se le tiene en cuenta para participar en casi ninguna de las vacantes de la Alcaldía de Cali obrantes en la Convocatoria No. 437 de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Respecto a este derecho fundamental, la Constitución Política establece en su Artículo 13 lo siguiente:

*"Todas las personas (...), recibirán el mismo trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades (...)"*

*El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (...)"*

16. En idéntico sentido, las actuaciones abiertamente irregulares de la Alcaldía de Cali vulneran además el **Principio de Confianza Legítima**, como quiera que el hecho de llevar desempeñando un cargo por más de siete (7) años bajo el cumplimiento del perfil del respectivo cargo, genera en el trabajador la convicción mínima de que, de iniciarse un concurso de méritos para la provisión de ese cargo, cumplirá con los requisitos para inscribirse y participar, buscando elevar su cargo de una categoría de provisionalidad a una de carrera administrativa. Resulta contrario al referido principio que se varíen injustificadamente y a último momento los requisitos para participar en un concurso de méritos que pretende proveer el cargo que se ha desempeñado por gran parte de su vida laboral, al grado de excluir la posibilidad de participar para la obtención del cargo. El cambio brusco e inesperado del perfil para ocupar el cargo que viene desempeñando mi representada materializa una vulneración injustificada de sus derechos de rango fundamental y un atropello a la confianza legítima que esta debió esperar de la administración, en este caso además su empleador. En relación al referido principio de confianza legítima se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-472 de 2009, de la siguiente manera:

*"La confianza legítima es un principio constitucional que directa o indirectamente está en cabeza de todos los administrados lo cual obliga al Estado a procurar su garantía y protección. Es un mandato inspirado y retroalimentado por el de la buena fe y otros, que consiste en que la administración no puede repentinamente cambiar unas condiciones que directa o indirectamente permitía a los administrados, sin que se otorgue un período razonable de transición o una solución para los problemas derivados de su acción u omisión. Dentro del alcance y límites es relevante tener en cuenta, según el caso concreto: (i) que no libera a la administración del deber de enderezar sus actos u omisiones irregulares, sino que le impone la obligación de hacerlo de manera tal que no se atropellen los derechos fundamentales de los asociados, para lo cual será preciso examinar cuidadosamente el*

***impacto de su proceder y diseñar estrategias de solución  
(...)***

Homogéneamente se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional respecto del concepto del Principio de Confianza Legítima, en Sentencia C-131 de 2004, de la siguiente manera:

***"PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA-Concepto***

***"En esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en cual pueda confiar.***

***(...)***

***si se trata de autoridades públicas, consiste en que la obligación para las mismas de preservar un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o acciones anteriores, incluso ilegales, salvo interés público imperioso contrario. Se trata, por tanto, que el particular debe ser protegido frente a cambios bruscos e inesperados efectuados por las autoridades públicas."***

17. En este orden de ideas, las actuaciones referidas también menoscaban el **Principio de la Prevalencia de la Realidad sobre las Formalidades** propio del ámbito del derecho laboral justo; como quiera que la actuación administrativa reprochada desconoce la realidad del cargo que ha ostentado mi representada por más de siete (7) años, con pleno decoro y excelencia, que no es otra diferente a que desde su profesión ha podido cumplir a cabalidad con las funciones asignadas al cargo, habiendo consonancia directa entre la profesión de mi representada y las funciones que lleva desempeñando durante gran parte de su vida laboral, al grado de no tener anotación disciplinaria ni llamado de atención alguno, por el contrario mi representada ha recibido menciones de honor, reconocimientos y agradecimientos por parte del Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación municipal y el mismo Alcalde de Santiago de Cali 2008-2012 (se anexa diplomas y documentos que certifican dichas exaltaciones). En referencia al referido principio ha manifestado la Honorable Corte Constitucional, entre otras, en Sentencia C-665 de 1998, lo siguiente:

***"Conforme lo establece el artículo 53 de la Carta Fundamental, el principio de la prevalencia de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral, implica un***

reconocimiento a la desigualdad existente entre trabajadores y empleadores, así como a la necesidad de garantizar los derechos de aquellos, sin que puedan verse afectados o desmejorados en sus condiciones por las simples formalidades." (Negritas y subrayas fuera de texto).

18. De manera concomitante, la actuación de las accionadas menoscaba el Derecho Fundamental al Trabajo de mi representada, protegido desde el preámbulo de la Constitución Política de 1991 como uno de los elementos fundantes de nuestro Estado Social de Derecho, como quiera que la modificación arbitraria del manual de funciones que elimina su perfil profesional para ejercer el cargo que ha ejercido por más de siete (7) años, sin estudio técnico, contrariando el estudio técnico vigente y a portas de la realización del concurso de méritos para proveer los cargos de la entidad, materializa la imposibilidad de inscribirse al concurso de méritos en el cargo para el cual se encuentra más capacitada, al ser el que viene ejerciendo gran parte de su vida laboral, menoscabando con ello la dignidad laboral que como servidora pública debe reconocérsele conforme a tantos años entregados al servicio de la entidad que, sin motivación técnica, se reitera, la obliga a no participar para acceder a su propio cargo. Respecto a este derecho fundamental ha reiterado la Honorable Corte Constitucional, entre otras, en Sentencia C-593 de 2014, lo siguiente:

*"La protección constitucional del trabajo, que involucra el ejercicio de la actividad productiva tanto del empresario como la del trabajador o del servidor público, no está circunscrita exclusivamente al derecho a acceder a un empleo sino que, por el contrario, es más amplia e incluye, entre otras, la facultad subjetiva para trabajar en condiciones dignas, para ejercer una labor conforme a los principios mínimos que rigen las relaciones laborales y a obtener la contraprestación acorde con la cantidad y calidad de la labor desempeñada. Desde el Preámbulo de la Constitución, se enuncia como uno de los objetivos de la expedición de la Constitución de 1991, el asegurar a las personas la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Es decir, el trabajo es un principio fundante del Estado Social de Derecho. Es por ello que desde las primeras decisiones de la Corte Constitucional se ha considerado que "Cuando el Constituyente de 1991 decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, quiso significar con ello que la materia laboral, en sus diversas manifestaciones, no puede estar ausente en la construcción de la nueva legalidad". Lo*

anterior implica entonces que dentro de la nueva concepción del Estado como Social de Derecho, debe entenderse la consagración constitucional del trabajo no sólo como factor básico de la organización social sino como principio axiológico de la Carta.  
(...)

(...) La jurisprudencia constitucional ha considerado que la naturaleza jurídica del trabajo cuenta con una triple dimensión. En palabras de la Corporación la "lectura del preámbulo y del artículo 1º superior muestra que el trabajo es valor fundante del Estado Social de Derecho, porque es concebido como una directriz que debe orientar tanto las políticas públicas de pleno empleo como las medidas legislativas para impulsar las condiciones dignas y justas en el ejercicio de la profesión u oficio. En segundo lugar, el trabajo es un principio rector del ordenamiento jurídico que informa la estructura Social de nuestro Estado y que, al mismo tiempo, limita la libertad de configuración normativa del legislador porque impone un conjunto de reglas mínimas laborales que deben ser respetadas por la ley en todas las circunstancias (artículo 53 superior). Y, en tercer lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta, el trabajo es un derecho y un deber social que goza, de una parte, de un núcleo de protección subjetiva e inmediata que le otorga carácter de fundamental y, de otra, de contenidos de desarrollo progresivo como derecho económico y social." (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En esta línea argumentativa resulta pertinente hacer énfasis en lo contenido en el Artículo 53 de la Constitución Política, norma que, si bien no está incluida dentro de el acápite de derechos fundamentales de la Carta Magna, involucra el ejercicio efectivo de los mismos, como se puede apreciar a continuación:

"Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por

*los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores."*

Como se puede apreciar, el anterior Artículo corresponde de manera directa con el caso que nos ocupa, pues en él se manifiesta de manera clara cuales con las directrices y principios fundamentales que guían al Estado en su rol de empleador, sin embargo, en el caso particular suscitado, dichos principios fueron omitidos completamente, resultando innecesario referirse nuevamente a los mismos, pues la norma es clara, al igual que su relación con el caso que nos ocupa. No obstante, de manera particular, se erige como pilar el principio de *primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales*, pues, la Subsecretaría de Planeación Sectorial no tiene otra opción que reconocer que durante el ejercicio de funciones en el cargo por casi 7 años mi representada cumple con las competencias suficientes para desempeñar perfectamente el mismo, sin embargo, ahora considera de manera arbitraria que debido a solemnidades o protocolos inconsistentes y sin fundamentos relacionados con la selección de los empleados de carrera administrativa, el perfil ya no es objeto de selección para el cargo en cuestión, derivando todo en claras violaciones a derechos constitucionales, tal y como se han puesto en evidencia a lo largo de la presente Acción Constitucional.

19. Sumado a lo anterior, con ocasión a los sendos atropellos previamente referidos, mi representada presentó varios derechos de petición a diferentes dependencias de la Alcaldía de Cali (adjuntos al presente documento), solicitando, con argumentos técnicos relativos al área de desempeño de su profesión, la inclusión de la misma en el perfil del cargo que actualmente ostenta, así como copia del sustento técnico de la última modificación del manual de funciones, entre otras cosas, no obteniendo respuesta en algunos de ellos y obteniendo respuestas abiertamente dilatorias y evasivas en otros (adjuntas al presente documento), hecho que además configura una clara vulneración al **Derecho Fundamental de Petición** de mi representada. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado constantemente respecto del derecho fundamental de petición, tal como lo muestra la Sentencia T-490/98, lo siguiente:



*"Debe precisarse, sin embargo, que el derecho de petición no impone a las autoridades una obligación de resolver positiva o negativamente las inquietudes del solicitante, ya que el contenido del pronunciamiento de la administración se sujetará a cada caso en particular. Sin embargo, lo que sí determina la eficacia de este derecho y le da su razón de ser, es la posibilidad que tiene cualquier persona de obtener una respuesta real y concreta a su inquietud presentada. Por consiguiente, la respuesta que la Administración otorgue deberá ser de fondo, clara, precisa y oportuna, haciendo que dicha contestación se convierta en un elemento esencial del derecho de petición, sin el cual este derecho no se realiza". (Subrayas y negrillas fuera de texto).*

En referencia a la estrecha correlación del derecho fundamental de petición, con otros derechos fundamentales y constitucionales, la Honorable Corte Constitucional ha manifestado en sentencia T-377 de 2000 lo siguiente:

*"El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión..."*

Además, en la misma sentencia refiriéndose a la contestación adujo dicha Corporación:

*"...El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido...La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, en forma clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. La propuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición..." (Subrayas y negrillas fuera de texto).*

20. Es importante resaltar que se vincula en calidad de accionada al presente proceso a la Comisión Nacional del Servicio Civil, con ocasión a que ésta entidad ha tomado de base el manual de funciones modificado por la Alcaldía de Cali para el establecimiento de los requisitos mínimos de cada cargo dentro del proceso concursal, dando continuidad al yerro iniciado por

la entidad territorial referida y menoscabando, esta vez desde la esfera de la Convocatoria No. 437, los mismos derechos fundamentales que quebranta la Alcaldía de Cali, pues con fundamento en un manual de funciones carente de sustento técnico, que contravía el estudio técnico de perfiles vigente y fue modificado solo días antes del concurso de méritos, pretende adelantar el proceso, cercenando los derechos de muchos funcionarios de la Secretaría de Educación y específicamente a la Subsecretaría de Calidad Educativa, variando sustancialmente los requisitos de formación que han ostentado los cargos que vienen ocupando durante años, razón por la que no lograrían ni siquiera tener posibilidades para concursar, aun cuando el perfil (profesión) corresponde al área de desempeño en la cual se encuentran trabajando desde hace varios años, entre estos, el caso específico de mi representada.

### **ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE EL PERFIL PROFESIONAL Y LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO DE MÍ REPRESENTADA**

Ahora bien, es perentorio resaltar que entre el perfil profesional de la carrera de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos y las funciones esenciales del cargo que ocupa mi poderdante existe una relación preponderante, la cual pasará a determinarse estableciendo el perfil de la profesión (Profesional en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, debidamente certificada en el Ministerio de Educación Nacional con el código SNIES número 16014 de la Universidad del Valle) y las funciones a las que se asocia, en los siguientes términos:

- **Perfil de la profesión:** Analista del entorno socio – político.
- **Funciones a las que se asocia:** 1. Realizar el diagnóstico y consolidación de resultados del sistema educativo municipal, requeridos en la formulación de planes, programas y proyectos de calidad educativa, de conformidad con metodologías y procedimientos establecidos. 2. Participar en el desarrollo de estrategias de calidad educativa que contribuyan al mejoramiento del sistema educativo municipal. 3. Participar en la implementación de políticas y estrategias de mejoramiento permanente de la prestación del servicio educativo en el Municipio de Santiago de Cali, de conformidad con metodologías y procedimientos establecidos.
- **Perfil de la profesión:** Participante activo en estudios Interdisciplinarios sobre las dinámicas y conflictos políticos, la convivencia y las políticas públicas en realidades locales y regionales.
- **Funciones a las que se asocia:** 4. Gestionar la ejecución de proyectos educativos y el seguimiento a los mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios técnicos definidos. 5. Realizar

actividades de ejecución, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos educativos, acorde con los lineamientos institucionales. 6. Promover los procesos de articulación intersectorial e interinstitucional requeridos para la prestación del servicio educativo, acorde con las políticas institucionales.

- **Perfil de la profesión:** Investigador de los procesos políticos colombianos y participante en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a procesos de modernización y democratización, a la construcción de proyectos alternativos para la convivencia Y la consolidación de lo público y de una institucionalidad democrática.
- **Funciones a las que se asocia:** 1. Realizar el diagnóstico y consolidación de resultados del sistema educativo municipal, requeridos en la formulación de planes, programas y proyectos de calidad educativa, de conformidad con metodologías y procedimientos establecidos. 2. Participar en el desarrollo de estrategias de calidad educativa que contribuyan al mejoramiento del sistema educativo municipal. 3. Participar en la implementación de políticas y estrategias de mejoramiento permanente de la prestación del servicio educativo en el Municipio de Santiago de Cali, de conformidad con metodologías y procedimientos establecidos. 4. Gestionar la ejecución de proyectos educativos y el seguimiento a los mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios técnicos definidos. 5. Realizar actividades de ejecución, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos educativos, acorde con los lineamientos institucionales. 6. Promover los procesos de articulación intersectorial e interinstitucional requeridos para la prestación del servicio educativo, acorde con las políticas institucionales. 7. Participar de las actividades de asistencia técnico pedagógica a los Establecimientos Educativos, de acuerdo con las necesidades, intereses de las comunidades y las políticas educativas municipales y nacionales. 8. Participar en la evaluación de planes, programas y proyectos del sistema educativo municipal, a partir del análisis de los resultados de la evaluación. 9. Desarrollar estrategias que permitan la identificación, caracterización y la atención de grupos poblacionales en el sistema educativo, de conformidad con las políticas institucionales.
- **Perfil de la profesión:** Formar y liderar procesos de educación en competencias en las áreas de política aplicada y de análisis, resolución y transformación de conflictos a partir de valores éticos, de justicia, libertad, construcción crítica, honestidad, igualdad, dignidad y resolución pacífica de los conflictos.
- **Funciones a las que se asocia:** 7. Participar de las actividades de asistencia técnico pedagógica a los Establecimientos Educativos, de acuerdo con las necesidades, intereses de las comunidades y las políticas

educativas municipales y nacionales. 8. Participar en la evaluación de planes, programas y proyectos del sistema educativo municipal, a partir del análisis de los resultados de la evaluación. 9. Desarrollar estrategias que permitan la identificación, caracterización y la atención de grupos poblacionales en el sistema educativo, de conformidad con las políticas institucionales.

- **Perfil de la profesión:** Desarrollar capacidades y competencias de liderazgo responsable y participativo y promover procesos de desarrollo de cultura política y de formación política de grupos y comunidades.
- **Funciones a las que se asocia:** 4. Gestionar la ejecución de proyectos educativos y el seguimiento a los mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios técnicos definidos. 5. Realizar actividades de ejecución, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos educativos, acorde con los lineamientos institucionales. 6. Promover los procesos de articulación intersectorial e interinstitucional requeridos para la prestación del servicio educativo, acorde con las políticas institucionales. 7. Participar de las actividades de asistencia técnico pedagógica a los Establecimientos Educativos, de acuerdo con las necesidades, intereses de las comunidades y las políticas educativas municipales y nacionales. 8. Participar en la evaluación de planes, programas y proyectos del sistema educativo municipal, a partir del análisis de los resultados de la evaluación. 9. Desarrollar estrategias que permitan la identificación, caracterización y la atención de grupos poblacionales en el sistema educativo, de conformidad con las políticas institucionales.

### SOLICITUD

En virtud de los argumentos facticos y jurídicos expuestos *a priori*, solicito de la manera más respetuosa lo siguiente:

1. Tutelar los derechos fundamentales y principios constitucionales quebrantados a mí representada, a saber, Derecho Fundamental al Debido Proceso, Derecho Fundamental a la Igualdad, Principio de Confianza Legítima, Principio de la Prevalencia de la Realidad sobre las Formalidades, Derecho Fundamental al Trabajo, Derecho Fundamental de Petición, así como los demás que su señoría considere vulnerados dentro del presente proceso.
2. Ordenar la contestación de fondo, de manera clara y congruente con lo solicitado, de todas las peticiones radicadas por mí representada.

Derechos  
peticiones CD

3. Ordenar la nulidad o suspensión del Decreto 4112.010.020.0271 de Junio 1 de 2018 proferido por la Alcaldía de Cali, mediante el cual se realizó la modificación del manual de funciones de la entidad sin sustento técnico alguno y a portas del inicio de inscripciones en la Convocatoria No. 437 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
4. Ordenar la aplicación del anterior manual de funciones, Decreto 411.0.20.0673 de diciembre de 2016 proferido por la Alcaldía de Cali, el cual se originó con respaldo en un estudio técnico, a saber, diagnóstico de cargas laborales, diseño y perfilación realizado mediante Contrato 4122.0.26.1.332 de 2014 con la unión temporal FCC Racionalizar, haciendo extensiva la aplicación de éste a la Convocatoria No. 437 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para el establecimiento de los perfiles requeridos para inscribirse en cada uno de los cargos del referido porceso concursal.

#### **MEDIDA CAUTELAR**

Solicito respetuosamente al Honorable Magistrado que, con base en lo consagrado por el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, se ordene a la Comisión Nacional el Servicio Civil suspender la Convocatoria No. 437 de 2017, hasta tanto se haya proferido una decisión de fondo en el presente asunto, como quiera que dada la etapa del concurso, que abre inscripciones por un término limitado el 16 de julio de 2018, se configura como un perjuicio irremediable la culminación de la etapa de inscripciones sin haberse decidido de fondo las pretensiones del presente proceso, de las cuales se puede derivar la posibilidad de que mi representada, así como muchos funcionarios que actualmente trabajan en provisionalidad en la Secretaría de Educación, Subsecretaria de Calidad Educativa, de la Alcaldía de Cali, puedan inscribirse para participar en los cargos que actualmente ostentan, hecho que en este momento no es posible con ocasión a la modificación del manual de funciones realizada de manera arbitraria, injustificada y a portas del concurso por la Alcaldía de Cali y acogida por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

#### **DECLARACIÓN BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO**

Bajo la gravedad de juramento manifestó que sobre las cuestiones fácticas y jurídicas narradas en el presente escrito no se ha presentado ante la jurisdicción acción de tutela alguna.

## **ANEXOS Y PRUEBAS**

Me permito anexar **CD-ROOM** con los siguientes documentos en formato PDF:

1. Poder Especial otorgado al suscrito.
2. Decreto de nombramiento de mí representada.
3. Decreto 0062 de 2007 (manual de funciones).
4. Decreto 0230 de 2011 (Manual de funciones).
5. Decreto 0285 de 2011 (Modificación del 0230).
6. Decreto 411.0.20.0673 de 2016 Manual de funciones.
7. Decreto 411.0.20.1221 de 2015 Manual de funciones.
8. Decreto 0500 de 2010 (Creación de los empleos).
9. Decreto 0621 de 2010 (Modificación del 0500).
10. Decreto 0746 de 2013 adición al decreto 0997.
11. Decreto 0997 de 2012 derogación manual 0230.
12. Diagnóstico de cargas laborales, diseño y perfilación realizado mediante Contrato 4122.0.26.1.332 de 2014 con la unión temporal FCC Racionalizar (que dio sustento al manual de funciones referido en la prueba anterior).
13. Impresión de aviso informativo de la Convocatoria No. 437 de 2017 de la Comisión Nacional de Servicio Civil, donde se manifiesta que las inscripciones empiezan el 16 de julio de 2018.
14. Derechos de petición presentados por mi representada.
15. Respuestas a los derechos de petición presentados por mi representada.
16. Carta de reconocimiento y agradecimiento por dedicación y compromiso como parte del equipo de trabajo del macroproyecto de ciudad: Ciudadelas educativas.

## NOTIFICACIONES

- El suscrito apoderado y mi representada recibiremos notificaciones en la Calle 13 No. 4-25 Oficina 806 del Edificio Carvajal de la ciudad de Cali (Valle), teléfono 3178721620, e-mail: eduarsuarez89@hotmail.com.
- La accionada, Alcaldía de Santiago de Cali, recibe notificaciones en las en el edificio CAM ubicado en la Avenida 2 Norte #10 - 70 de la ciudad de Cali (Valle), teléfono: 8879020, e-mail: notificacionesjudiciales@cali.gov.co.
- La accionada, Comisión Nacional del Servicio Civil, recibe notificaciones en la Carrera 16 No. 96 - 64, Piso 7, de la ciudad de Bogotá D.C., Pbx: 57 (1) 3259700 Fax: 3259713, e-mail: notificacionesjudiciales@cnscc.gov.co.

Agradeciendo la atención y colaboración brindada.

Atentamente,

*Eduardo Arango S.*  
**EDUARDO ARANGO SUAREZ**  
C.C. No. 1.107.056.751 de Cali (Valle)  
T.P. No. 247.583 del C.S. de la J.

